

C.A. de Santiago

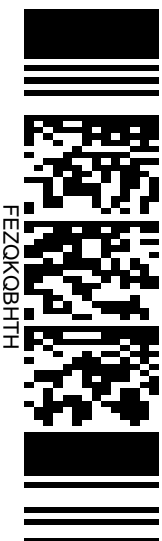
Santiago, dieciséis de enero de dos mil veinte.

VISTO:

Ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago se sustanció la causa caratulada “Peña con Fisco de Chile”, RIT N° O-3477-2018, RUC N° 18-4-0108652-4, por declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones.

Por sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, el tribunal rechazó la excepción de incompetencia absoluta, de falta de legitimación activa y pasiva, acogió la demanda declarando la relación laboral, desde el día 19 de mayo de 2014 al 23 de marzo de 2018, que el despido fue injustificado, condenando al pago de las indemnizaciones derivadas del término de la relación laboral con un recargo del 50% respecto de la Indemnización por años de servicios, además del pago del feriado proporcional, cotizaciones previsionales y de salud, por todo el período trabajado, rechazándose, en lo demás, la demanda.

Contra esta sentencia, la demandada recurrió de nulidad, invocando cuatro causales en forma subsidiaria, estas son, las del artículo 478 letra a), letra c) y la 477, en 2 hipótesis, todas del Código del Ramo, solicitando para el caso de la primera causal, que se deje sin efecto y se anule el procedimiento, disponiendo la remisión de los antecedentes al tribunal civil competente, en cuanto a la segunda y tercera causal, que se anule la sentencia recurrida y se dicte una de reemplazo que rechace íntegramente la demanda, con costas y, en el caso de la última causal, solicita que se anule el fallo en aquella parte que condena a las indemnizaciones sin tope legal, y se dicte una de



reemplazo parcial, indicando que los montos deben ser determinados en pesos y reajustados según la variación del IPC.

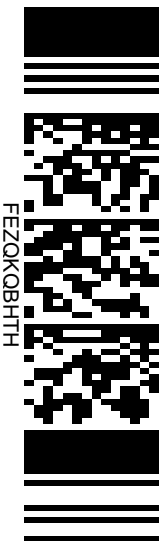
Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, escuchando los alegatos de las partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la primera causal deducida, esto es, la del artículo 478 letra a) del Código del Trabajo - la incompetencia absoluta del Tribunal que dictó la sentencia- la fundamenta en que éste no podía conocer de estos autos por no existir relación laboral entre las partes, ya que no se dan los institutos de empleador y trabajador, propios del contrato de trabajo.

Manifiesta que conforme a los antecedentes aportados al proceso por ambas partes, resultaba manifiesto que el Tribunal era incompetente, por la sola aplicación del artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, ya que la contratación del demandante se ciñó expresa y taxativamente a las prescripciones de la Ley de Bases de la Administración del Estado, en sus artículos 15 y 1° del Estatuto Administrativo, vinculación que se encuentra expresamente regulada en su artículo 11. En definitiva, por tratarse de contratos a honorarios, se rige por las disposiciones del convenio y, supletoriamente por las normas del Código Civil, particularmente, las del arriendo de servicios inmateriales, contenidas en el párrafo 9° del Título XXVI del Libro IV.

Agrega que siendo el demandado el Fisco de Chile, el juez de la instancia debió tener en cuenta que éste se rige por las normas y principios del derecho público, y en particular por el denominado “principio de legalidad” que rige los actos de la administración pública, debiendo entonces considerar que por expresa disposición de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y lo

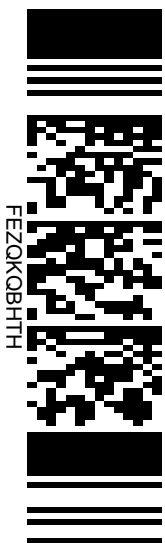


dispuesto en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, se encontraba impedido de aplicar las disposiciones del Código Laboral.

Considera que de haberse aplicado correctamente el artículo 420 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 1° de ese Código y los artículos 1 y 11 del Estatuto Administrativo en relación con el artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el Tribunal debió haberse declarado incompetente para conocer de esta causa, ya que las relaciones entre el Estado y el personal a honorarios se rigen, por así disponerlo el Estatuto Administrativo, por las normas del propio convenio y en forma subsidiaria por las normas del Código Civil, excluyendo consecuentemente la aplicación del Código del Trabajo.

SEGUNDO: Que para resolver la incompetencia alegada, baste con señalar que, en la especie, se dedujo demanda de declaración de relación laboral, nulidad de despido y por despido injustificado, por lo que resulta evidente que las acciones reseñadas y que dieron motivo a este juicio, se insertan dentro de la hipótesis que contempla el artículo 420 letra a) del Código Laboral, y por tanto, son de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, siendo una cuestión completamente diversa el éxito que puedan obtener tales pretensiones, ya que dependerá de las alegaciones y prueba que al efecto se rindan.

TERCERO: Que lo antes razonado no obsta a que el demandado hizo valer como defensa que la naturaleza del vínculo corresponde a un contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de honorarios- y por tanto de competencia de los Tribunales Civiles- y no a una relación laboral, pues entiende que el estatuto especial corresponde al respectivo contrato a honorarios. Así



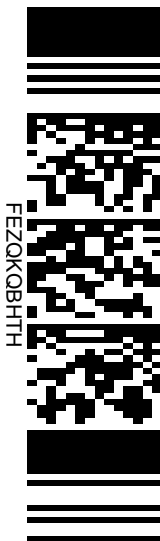
entonces, requerido como ha sido, el Tribunal Laboral, le incumbe decidir, en la sentencia que al efecto se dicte, de qué naturaleza era la vinculación existente entre las partes y, consecuentemente, las normas legales aplicables a dicha relación.

CUARTO: Que, en la especie, conforme a la prueba rendida en el juicio se ha declarado la existencia de la relación laboral entre las partes en tanto vigente tal vinculación, de modo que, esa decisión solo corrobora el aserto que, la acción era plenamente procedente de ser conocida y fallada por dicha judicatura.

QUINTO: Que, de acuerdo con lo razonado, la primera causal alegada por el Fisco de Chile, será rechazada.

SEXTO: Que de forma subsidiaria, invoca la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, fundada en que la sentencia califica la relación entre las partes como una relación laboral, lo que considera erróneo, por cuanto es diferente a la aportada por las partes al proceso, desconociendo abiertamente la autonomía de la voluntad de los contratantes expresada en el contrato de honorarios, sin siquiera hacer un análisis de la teoría del caso propuesta por su parte, la que se basa en la forma en que se cumplieron los contratos de honorarios, llegando a concluir que existen hechos que permiten establecer un vínculo de subordinación y dependencia, como considerando también el tiempo de la contratación.

Indica que, conforme se evidencia del considerando octavo de la sentencia, el tribunal yerra al calificar los hechos atribuyéndoles la condición de ser elementos propios de una relación laboral, en circunstancias que ninguno de tales hechos hacen aplicables al caso de autos el artículo 7° del Código del Trabajo ni otras normas de dicho cuerpo legal, por cuanto dichas condiciones pueden

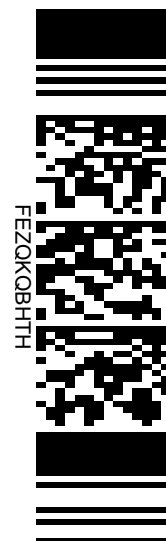


perfectamente pactarse en un contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de honorarios en uso de la autonomía de la voluntad de las partes, a cuyas reglas se remite el artículo 11 del Estatuto Administrativo al definir el sistema jurídico propio de las personas contratadas bajo esa modalidad y cuyo marco jurídico es asimilable al arrendamiento de servicios profesionales regido por el derecho común.

Asevera que el hecho que a demandante realizara las labores a las que hace alusión el fallo, no genera ni puede generar una relación de carácter laboral, tanto porque estas condiciones pudieron caracterizar la prestación de servicios cumplida por la actora de acuerdo a su convenio de honorarios, cuanto porque el Código del Trabajo no rige para la Administración del Estado, sino del modo supletorio señalado en su artículo 1°, que no se extiende a los contratos de honorarios.

Concluye expresando que la naturaleza jurídica de la relación contractual habida con a demandante corresponde a la de un acuerdo civil de prestación de servicios, sancionada por actos administrativos que tienen plena validez y en base a los antecedentes que fueron aportados por las partes y así debió declararlo el sentenciador tomando en consideración que sus servicios fueron expresamente para una labor, lo que nunca se puso en entredicho, y aparece de manifiesto en la prueba aportada por ambas partes.

SÉPTIMO: Que, respecto de la causal de invalidación en estudio, es la prevista en la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, “cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”. Esta causal como se ha sostenido reiteradamente,

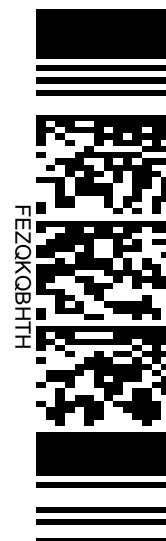


dice relación estrictamente con una cuestión de derecho, pues debe determinarse si un hecho establecido en el proceso, se encuentra regulado por una determinada norma legal para lo cual el tribunal debe realizar un juicio de valor, pero con la limitación que no pueden alterar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

OCTAVO: Que, por consiguiente, la impugnación ha de realizarse con estricta sujeción a tales hechos, sin agregar otros diversos de los fijados y sin que pueda prescindirse tampoco de los que fueron asentados en el fallo.

NOVENO: Que son hechos establecidos en la sentencia, los siguientes:

- a) La actora durante todo el período que prestó servicios estaba sujeta a instrucciones específicas en relación a las labores a realizar, debiendo dar cuenta de las mismas.
- b) Tenía jornada semanal de 44 horas semanales, de lunes a viernes de 08,00 horas a 20,00 horas, debiendo registrar su asistencia.
- c) Sus servicios se extendieron desde el día 19 de mayo del año 2014 hasta el día 23 de marzo del año 2018, en forma ininterrumpida.
- d) Su remuneración ascendió a la suma de \$3.119.064 pesos mensuales.
- e) La actora fue despedida mediante Decreto Exento RA N°289/112/2018 que puso término anticipado al convenio de honorarios.
- f) La demandada no acreditó los fundamentos de hecho en que sustentó el término de tales servicios.

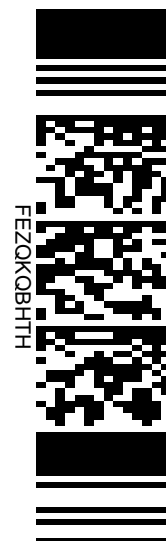


- g) La demandada no pagó las cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía durante todo el periodo laborado por la demandante.
- h) Se probó que la actora hizo uso de su feriado legal.
- i) En cuanto al proporcional se le adeudan 4,65 días

DECIMO: Que sobre la base de los hechos reseñados precedentemente el tribunal de la instancia, concluyó que se configuraban todos y cada uno de los elementos del artículo 7 del Código del Trabajo, por lo que la relación contractual era de naturaleza laboral, que el despido fue injustificado y, consecuentemente, acogió la demanda, declaró la existencia de la relación laboral y el pago de las indemnizaciones legales, feriado proporcional y las cotizaciones de seguridad social por todo el período laborado.

UNDECIMO: Que, de acuerdo con lo que se viene razonando, es posible concluir que la causal alegada ha sido construida sobre la base de hechos no establecidos en la sentencia, pues el recurrente reitera que la relación contractual era de naturaleza civil; sin embargo, aun cuando así lo expresaban los documentos suscritos por ambas partes, en realidad, se ocultaba un contrato de trabajo; por lo que la calificación jurídica de los hechos ha sido correctamente realizada, coincidiendo de este modo, con lo concluido por la sentencia que por esta vía se impugna.

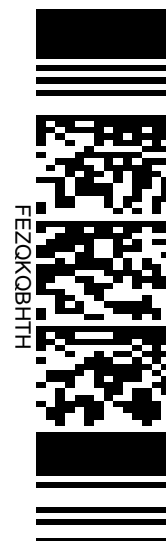
DUODECIMO: Que, como tercera causal subsidiaria, invoca la del artículo 477 del Código del Trabajo, en la hipótesis de infracción de ley, alegando el quebrantamiento de los siguientes grupos de normas:



a) Artículos 1 de la ley 18.834, Estatuto Administrativo y 15 de la Ley 18.575, en relación con el artículo 11 del aludido Estatuto Administrativo, los cuales han sido infringidos al no dárseles la aplicación debida. Refiere que la actora fue contratada para un cometido específico y que se acompañó en la instancia pertinente una descripción detallada de sus funciones, las cuales se encuentran dentro del marco de un Programa, estando en la hipótesis del artículo 11 de la Ley N°18.834. Expresa que la sentencia desconoce la facultad de la administración pública de contratar la realización de servicios a honorarios, añadiendo que al Fisco le resultaba imposible descontar cualquier suma de dinero de los honorarios que se le pagaron a la demandante, en observancia del artículo 96 del Estatuto Administrativo.

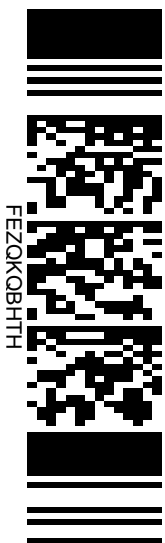
b) Artículos 6, 7 y 100 de la Constitución Política de la República en relación con el art. 11 de la Ley 18.834, todos los cuales resultan infringidos en relación al principio de juridicidad y la forma en que el Estado debe contratar al personal para sus servicios, encontrándose obligado a cumplir con la normativa vigente.

c) Artículos 1, 3, letra a) y b), 5, 7, 8, 58, 160, 162, 163 y 168 del Código del Trabajo en relación con los artículos 63 y 173 del mismo cuerpo legal, por cuanto la aplicación supletoria de este cuerpo de leyes, solo dice relación con los funcionarios, no con el personal contratado a honorarios, destacando que la demandante no tiene la calidad de funcionario público. Asimismo, se infringe el artículo 3 letras a) y b) al ser aplicado indebidamente a una situación que no se encuentra regulada por las normas dicho cuerpo legal, ya que no se pueden asimilar las partes del contrato de servicios a honorarios a un empleador y trabajador. Alega una falsa aplicación de los artículos 5,



7 y 8 del Código del Trabajo, ya que de haberse aplicado correctamente habrían tenido que concluir que no concurrían los elementos para dar por establecida la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia. También resultan falsamente aplicados los artículos 168 del Código del Trabajo en relación con los artículos 63, 160, 163 y 173 del citado cuerpo legal, al otorga indemnizaciones de carácter laboral a una persona que no reunía los requisitos para acceder a dichos beneficios.

d) Artículos 4° inciso 2° y artículo 9° inciso 3° del DL N°1263, en relación con el artículo 96 de la ley 18.834, todas normas sobre legalidad presupuestaria, las cuales resultan infringidas al disponer el pago de cotizaciones previsionales por un periodo que no correspondía su entero al no existir relación laboral y por ende no había forma de realizar ese desembolso. Expresa que durante el periodo que subsistió la relación bajo honorarios a suma alzada, el servicio se encontraba fáctica y jurídicamente imposibilitado para cumplir con lo señalado en el artículo 58 del Código del Trabajo ya que el Fisco de Chile carecía de título para retener y pagar en las instituciones de seguridad social las cotizaciones. No existía norma que autorizara o permitiese la contratación sobre la base de un contrato regido por el Código del Trabajo, por lo que nunca existió obligación de enterar las cotizaciones en los organismos de seguridad social. Considera infringido el artículo 96, prohibición de deducir de las remuneraciones de los funcionarios otras que no correspondan al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas por las leyes. Atendido que en el caso de marras se encontraban ante un contrato a honorarios, no correspondía dicho descuento. Luego realiza consideraciones relativas al costo

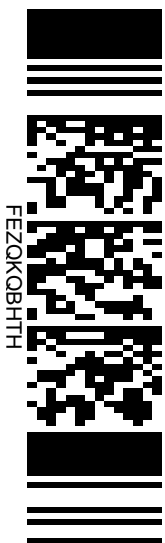


económico que implica para el Fisco de Chile el imponérsele la obligación de pagar cotizaciones previsionales de personal que trabajó a honorarios.

e) Artículos 1545 y 1546 del Código Civil, al no ser aplicados debidamente al caso de autos, al transgredirse la ley del contrato que vinculó a las partes. Agrega que el demandante no ha suscrito con la Subsecretaría del Interior ni con el Fisco de Chile un contrato laboral, sino que diferentes contratos de prestación de servicios a honorarios, regidos por el artículo 11 del Estatuto Administrativo, lo que le confiere el carácter de estatuto contractual especial, al cual debió ceñirse y estarse la sentenciadora del grado. Estos acuerdos de honorarios establecían la naturaleza del convenio y de su extensión.

DECIMO TERCERO: Que, como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, sobre infracción de ley, esta tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se ha tenido por probados.

DECIMO CUARTO: Que desde este punto de vista lo que se hace a través de la infracción de ley, como causal de nulidad, es la confrontación de la sentencia con la ley llamada a regular el caso, lo que supone fidelidad a los hechos probados en ella, pues lo que se ha de examinar es si las conclusiones fácticas encuadran en el supuesto legal respectivo. En definitiva, para poder examinar el juzgamiento jurídico del caso resulta menester que los hechos, a partir de los que se estructura la impugnación, se encuentren fijados en la sentencia- los que son inamovibles- pues solo de cumplirse tal



exigencia, se podrá generar el debate sobre la infracción de ley que se denuncia.

DECIMO QUINTO: Que como se ha dejado asentado en el motivo noveno precedente, se acreditó la existencia de la relación laboral entre las partes, que hubo despido, que los hechos que motivaron tal desvinculación, no fueron probados y que no se pagaron las cotizaciones de seguridad social durante todo el período que duró la vinculación.

DECIMO SEXTO: Que como se advierte de lo que hasta aquí se ha expuesto, lo pretendido por la recurrente es que, se rechacen las pretensiones de la actora, pero no sobre los hechos fijados por el tribunal sino sobre unos diversos, pues insiste que la vinculación era de naturaleza civil; y, consecuentemente, aplique las normas que indica en su arbitrio; y por otra parte, denuncia la falsa aplicación de las normas del Código del Trabajo, siendo que, precisamente, estas sí resultan aplicables, porque el fallo estableció que hubo una relación laboral de modo que, es procedente, la aplicación de las mismas; y, las consecuencias de dicha declaración, esto es, la condena a la demandada al pago de las indemnizaciones y prestaciones que de ella derivan. En efecto, reconociéndosele al Fisco de Chile el carácter de empleador, debe cumplir con las obligaciones que le impone la ley, no siendo procedente que pretenda excusarse de su pago; por el contrario, como demandado y empleador, debe igualmente cumplir con ellas como cualquier otro deudor.

DECIMO SEPTIMO: Que la última causal invocada es la del artículo 477 del Código del Trabajo, en su hipótesis de infracción de ley, alegando infringidos los artículos 172 en relación con los artículos 63, 162, 168 y 173, del mismo Código, infracción que se produce al

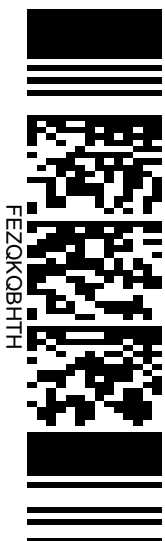


otorgar las indemnizaciones propias del término de la relación de trabajo en Unidades de Fomento y no en pesos chilenos, las que, según las normas infraccionadas, deben reajustarse conforme a la variación del IPC. Explica que el sentenciador utiliza un índice de reajuste-, UF- distinto a lo dispuesto en los artículos 173 y 63 del Código del Trabajo. Asimismo, alega una falsa aplicación del artículo 172 inciso final del Código del Trabajo, ya que el error se produce al incorporar a la condena, los montos calculados en Unidades de Fomento, atendida la limitación legal, pero el tope debe ser señalado en pesos, no modificando la forma de reajustabilidad.

DECIMO OCTAVO: Que es un hecho inamovible que la remuneración se fijó en la suma de \$ 3.119.064, reconociendo que dicha suma excede las 90 Unidades de Fomento. Lugo se fija el pago de las indemnizaciones en 90 Unidades de Fomento (indemnización sustitutiva del aviso previo) 360 Unidades de Fomento (indemnización por años de servicios) y 180 Unidades de Fomento (recargo legal del 50%) Así se lee en la parte final de la página 88 y la página 89. Lo que se reitera en el punto III de la parte resolutive del fallo. Enseguida en el punto VII, se dispone el procede reajuste e intereses, según lo preceptuado en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

DECIMO NOVENO: Que el inciso final del artículo 172 del Código del Trabajo establece que: *“Con todo, para los efectos de las indemnizaciones establecidas en este título, no se considerara una remuneración mensual superior a 90 unidades de fomento del ultimo día del mes anterior al pago, limitándose dicho monto la base de cálculo”*.

VIGESIMO: Que, efectivamente, como lo sostiene la recurrente los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, disponen el pago de



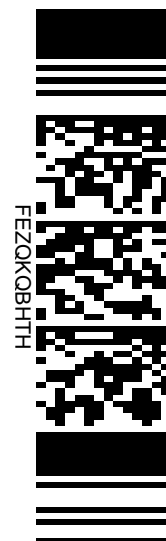
reajustes e intereses respecto de las sumas que se adeuden a los trabajadores; la primera con motivo de aquellas devengadas por la prestación de sus servicios; y la segunda, de las indemnizaciones por el término de la relación laboral.

VIGESIMO PRIMERO: Que la acertada inteligencia de las normas antes particularizadas, según criterio de esta Corte, es que, efectivamente, al percibir la actora una remuneración superior a aquella indicada en el artículo 172 del citado Código, las indemnizaciones legales debían fijarse- como base de cálculo- precisamente en la suma de 90 unidades de fomento como en aquella se indica; siendo improcedente que esta se incremente nuevamente con los reajustes a que se alude en el artículo 173 del mismo Código.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, sin embargo, respecto del saldo de feriado proporcional y cotizaciones de seguridad social estas prestaciones, se han determinado sobre la base de la remuneración fijada en la sentencia, a lo que, a su respecto, no rige la limitación del artículo 172 del Estatuto Laboral, de modo que sobre estas sumas sí procede el incremento del artículo 63 del citado Estatuto.

VIGESIMO TERCERO: Que de acuerdo con lo que se vine razonando se concluye que, respecto de las indemnizaciones legales reconocidas en el fallo y a que ha sido condenado el demandado, se le aplicado una doble reajustabilidad, infringiendo las normas legales denunciadas, lo que ha tenido influencia sustancia en lo dispositivo del fallo, desde que se aumenta en forma improcedente y, en perjuicio del demandado, las sumas antes indicadas.

VIGESIMO CUARTO: Que por las razones antes indicadas el recurso en examen será acogido, en los términos ya indicados.



Por estos fundamentos, citas legales y lo dispuesto en los artículos 481 y 482 del Código Laboral, **se acoge** el recurso de nulidad deducido por la parte demandada en contra de la sentencia de treinta y uno de mayo del año dos mil diecinueve, la que se invalida y se la remplaza por la que se dicta a continuación separadamente y sin nueva vista.

Redactó la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

Regístrese y comuníquese

Rol N° 1753-2019

Pronunciada por la Duodécima Sala, integrada por los Ministros señor Miguel Eduardo Vazquez Plaza, señora Marisol Andrea Rojas Moya y Ministra (s) señora Veronica Sabaj Escudero.

No firma Ministra (s) señora Veronica Sabaj Escudero, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por ausencia.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta ltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, dieciséis de enero de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

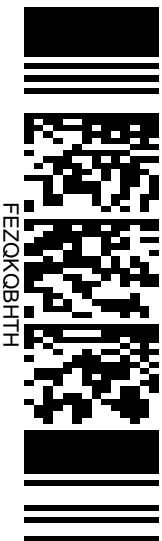
MIGUEL EDUARDO VAZQUEZ PLAZA	MARISOL ANDREA ROJAS MOYA
MINISTRO	MINISTRO
Fecha: 16/01/2020 12:27:39	Fecha: 16/01/2020 12:10:09

FEZOKQBHTH



Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Miguel Eduardo Vazquez P., Marisol Andrea Rojas M. Santiago, dieciséis de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a dieciséis de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



C.A. de Santiago

Santiago, dieciséis de enero de dos mil veinte.

En cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se dicta la sentencia de remplazo que sigue.

VISTOS:

De la sentencia invalidada se mantiene su parte expositiva y considerativa.

Y teniendo además presente:

PRIMERO: Los considerandos décimo octavo al vigésimo segundo, que se tienen por reproducidos.

SEGUNDO: Que las indemnizaciones legales y el recargo, reconocido en el fallo deberá pagarse conforme al artículo 172 del Código del Trabajo y el interés fijado en el artículo 173, del mismo cuerpo de leyes.

TERCERO: Que, por su parte, el saldo de feriado legal y las cotizaciones de seguridad social a que ha sido condenado el demandado se incrementarán con los reajustes e intereses indicados en el artículo 63 del Código ya citado.

Por estas consideraciones, citas legales y visto además lo dispuesto en los artículos 1,2,7,8,9,10,63,73,162,163,168,172,173,446 y 459 del Código del Trabajo, artículo 1 y 11 de la ley 18.834, artículos 6 y 7 de la Constitución Política del República, se declara que:

I.- Que se rechazan las excepciones de incompetencia absoluta del tribunal, falta de legitimación activa del demandante, y falta de legitimación pasiva del demandado intentadas por la SUBSECRETARÍA (MINISTERIO) DE HACIENDA, RUT N° 61.806.000-4, persona jurídica de derecho público representada



legalmente por doña María Eugenia Manaud Tapia, por los argumentos indicados en el Considerando séptimo de esta sentencia.

II.- Que se acoge la demanda declarativa de relación laboral intentada por la demandante MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMIREZ, en contra de FISCO DE CHILE-SUBSECRETARÍA (MINISTERIO) DE HACIENDA, RUT N° 61.806.000-4, persona jurídica de derecho público representada legalmente por doña María Eugenia Manaud Tapia, por los argumentos indicados en el Considerando octavo de esta sentencia, y se declara que hay relación laboral entre las partes desde el 19/5/2014 al 23/3/2018.

III.- Que se acoge la demanda de despido injustificado intentada por la demandante MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMIREZ, en contra de FISCO DE CHILE-SUBSECRETARÍA (MINISTERIO) DE HACIENDA, RUT N° 61.806.000-4, persona jurídica de derecho público representada legalmente por doña María Eugenia Manaud Tapia, por los argumentos indicados en el Considerando octavo de esta sentencia, y se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones:

- indemnización sustitutiva del aviso previo, por la suma de 90 UF.
- indemnización por años de servicio, por la suma de 360 UF
- recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, por la suma de 180 UF.

IV.- Que se acoge parcialmente la demanda de cobro de prestaciones intentada por la demandante MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMIREZ, en contra de FISCO DE CHILE-SUBSECRETARÍA (MINISTERIO) DE HACIENDA, RUT N° 61.806.000-4, persona jurídica de derecho público representada



legalmente por doña María Eugenia Manaud Tapia, por los argumentos indicados en el Considerando octavo de esta sentencia, y se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones:

- Saldo de feriado proporcional, por la suma de \$676.836 pesos.-

- cotizaciones previsionales, y de salud, por todo el periodo trabajado, a saber, desde el 19/5/2014 al 23/3/2018, en base a una remuneración mensual de \$3.119.064 pesos mensuales.

V.- Que se rechaza la demanda de nulidad del despido intentada por la demandante MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMIREZ, en contra de FISCO DE CHILE-SUBSECRETARÍA (MINISTERIO) DE HACIENDA, RUT N° 61.806.000-4, persona jurídica de derecho público representada legalmente por doña María Eugenia Manaud Tapia, por los argumentos indicados en el Considerando octavo de esta sentencia.

VI.- Que se rechaza la petición de pagar cotizaciones de cesantía por todo el periodo trabajado, al no estar afiliada la actora a la AFC CHILE S.A.

VII.- Las indemnizaciones reconocidas en el punto III precedente, deberán pagarse con los intereses contemplados en el artículo 172 del Código del Trabajo; respecto de las prestaciones reconocidas en el punto IV, se incrementarán con los reajustes e intereses establecidos en los artículos 63 y 173 del Estatuto Laboral.

VIII.- Que no se condena en costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.

IX.- Devuélvanse los documentos acompañados, previo registro.



X.- Ejecutoriada que este la presente sentencia, cúmplase con lo dispuesto en ella, dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, para su ejecución.

Regístrese y comuníquese

Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya

Rol N° 1753-2019

Pronunciada por la Duodécima Sala, integrada por los Ministros señor Miguel Eduardo Vazquez Plaza, señora Marisol Andrea Rojas Moya y Ministra (s) señora Veronica Sabaj Escudero.

No firma Ministra (s) señora Veronica Sabaj Escudero, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por ausencia.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta ltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, dieciséis de enero de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

MIGUEL EDUARDO VAZQUEZ PLAZA	MARISOL ANDREA ROJAS MOYA
MINISTRO	MINISTRO
Fecha: 16/01/2020 12:27:46	Fecha: 16/01/2020 12:10:12



Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Miguel Eduardo Vazquez P., Marisol Andrea Rojas M. Santiago, dieciséis de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a dieciséis de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

